

Señores  
**JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO (REPARTO)**  
Buga– Valle del Cauca

ASUNTO: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: **JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES Y OTROS**

DEMANDADOS: **LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, NACIÓN – RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO, MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL.**

**JONATHAN VELÁSQUEZ SEPÚLVEDA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.116.238.813 de Tuluá, y tarjeta profesional No. 199.083 del C. S. de la J., actuando en calidad de representante legal y profesional del derecho inscrito en el certificado de existencia y representación legal de **LEGALGROUP ESPECIALISTAS EN DERECHO S.A.S.** con NIT. 900.998.405-7, persona jurídica apoderada<sup>1</sup> judicial de las personas relacionadas en el acápite de “DEMANDANTES”, según poderes que adjunto, presento acción de reparación directa en contra de **LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, NACIÓN – RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO, NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL**, representadas por el Fiscal General de la Nación, el señor Néstor Humberto Martínez Neira, el Director de la Rama Judicial, el Director de la Policía Nacional, respectivamente, o quienes hagan sus veces, para que se declaren responsables administrativa y patrimonialmente, de forma solidaria, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto la señora **JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES**, entre el 07 de noviembre del 2013 y el 20 de marzo del 2015. En consecuencia, se indemnice por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales y en general aquellos que el H. Consejo de Estado ha reconocido, según los hechos y pretensiones que a continuación se consignan.

#### **INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PARTES**

#### **LEGITIMACIÓN POR ACTIVA: LA VÍCTIMA JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES Y DIRECTOS AFECTADOS POR LOS PERJUICIOS CAUSADOS**

<sup>1</sup> Artículo 75 C.G.P.: “Designación y sustitución de apoderados. Podrá conferirse poder a uno o varios abogados. Igualmente podrá otorgarse poder a una persona jurídica cuyo objeto social principal sea la prestación de servicios jurídicos. En este evento, podrá actuar en el proceso cualquier profesional del derecho inscrito en su certificado de existencia y representación legal. Lo anterior, sin perjuicio de que la persona jurídica pueda otorgar o sustituir el poder a otros abogados ajenos a la firma. Las Cámaras de Comercio deberán proceder al registro de que trata este inciso.”

DEMANDANTES

NOMBRE	DOC.	IDENTIFICACIÓN	CALIDAD FRENTE A LA VÍCTIMA
JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES	CC	31.794.321	VÍCTIMA
GERALDIN MUÑOZ SANTACRUZ	RC	1.117.352.332	HIJA
MARÍA LIDA TORRES GRAJALES	CC	29.755.958	MADRE
MARY LUZ HERNÁNDEZ TORRES	CC	1.116.256.005	HERMANA
VALERY OCAMPO HERNÁNDEZ	RC	1.117.355.581	SOBRINA (HIJA DE MARY)
SARA SOFÍA OCAMPO HERNÁNDEZ	RC	1.117.352.626	SOBRINA (HIJA DE MARY)

DEMANDADAS: LEGITIMACIÓN POR PASIVA:

**NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN:** Ya que fue la Fiscalía cinco (05) URI Tuluá Valle, la que asumió la investigación y quien solicitó la imposición de medida de aseguramiento, así como la correspondiente formulación de cargos a la señora: JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES como presunta autora del delito de TRÁFICO, FABRICACIÓN, PORTE DE ESTUPEFACIENTES, logrando con sus supuestas pruebas que el JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA, le impusiera la respectiva medida de aseguramiento INTRAMURAL, iniciando así el calvario para la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES.

Frente a la legitimación en la causa, el **CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C. Consejero ponente: GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE.** Mediante sentencia del quince (15) de octubre de dos mil quince (2015)- **Radicación número: 05001-23-31-000-2003-03407-01(34952) Actor: OCTAVIO MUÑOZ GRISALES Y OTROS Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - Y OTROS,** manifiesta entre otros, que: *“La Nación-Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva, pues es la entidad encargada de la investigación y acusación del señor Octavio Muñoz Grisales en el proceso penal que se le siguió...”*.

**NACIÓN – RAMA JUDICIAL:** Ya que fue el JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA, el que impartió legalidad a la captura, además fue quién **impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva INTRAMURAL a la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES**; sin hacer un estudio minucioso de las circunstancias en las cuales fue capturada mi representada y sin advertir que ya la Policía judicial había señalado como responsable a la señora SANTACRUZ TORRES, al dejar en libertad a los demás capturados y dejar como única responsable del delito a una persona que era totalmente inocente, iniciando así el calvario para la demandante y sus familiares.

#### **NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL**

Por ser los agentes de la Policía Judicial de la Policía Nacional, encargados materializar la orden de registro allanamiento al inmueble donde se encontraba mi prohijada y posteriormente la capturan en compañía de 5 personas más y su hija quien fue entregada a la madre de mi defendida, circunstancias que fueron consagradas en un informe de Policía Judicial que falta a la verdad con relación a lo ocurrido en el lugar de los hechos.

Es evidente la extralimitación de los funcionarios de policía judicial quienes no solo capturan a una persona inocente que se encontraba solo ejerciendo su labor como promotora de catálogos si no que deciden ser jueces y dejar en libertad antes de la audiencia de legalización e captura a los demás capturados y señalar como única responsable a la señora SANTACRUZ TORRES, enmarcando el actuar de la Policía judicial en una flagrante violación de derechos fundamentales y la ley, tal como fue advertido por el Juez de conocimiento al compulsar copias para que fueran investigados dichos funcionarios .

### **HECHOS**

1. La señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, es hija de la señora MARÍA LIDA TORRES GRAJALES. (VER PRUEBA 1 – REGISTROS CIVILES).
2. La señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, tiene una hija menor de edad, de nombre GERALDIN MUÑOZ SANTACRUZ. (VER PRUEBA 1 –

REGISTROS CIVILES).

3. JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, tiene una (1) hermana, la señora MARY LUZ HERNÁNDEZ TORRES. (VER PRUEBA 1 – REGISTROS CIVILES).

4. La señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES tiene dos (2) sobrinas, menores de edad, VALERY OCAMPO HERNÁNDEZ y SARA SOFÍA OCAMPO HERNÁNDEZ. (VER PRUEBA 1 – REGISTROS CIVILES).

5. Ya que JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES careció de una figura paterna, le correspondió a su madre velar siempre por el sustento del hogar. Es por eso que ésta, se convirtió en un gran apoyo para su madre, pues trabajaba como promotora de catálogos labor que ejercía puerta a puerta en la ciudad de Tuluá y combinaba con actividades de oficios varios que le permitieran lucrarse para llevar a casa todo lo necesario para poder velar por el sustento suyo, de su madre y de su hija a quien su padre no le entrega ninguna ayuda, lo que la convertía en la cabeza de su hogar y el respaldo para su hermana cumpliendo las funciones de tía también.

6. El día 6 de noviembre de 2013, en horas de la noche, mi representada se encontraba en el inmueble ubicado pasaje número 18 No. 22-10 del barrio rojas de la ciudad de Tuluá, ejerciendo la labor de promotora de catálogos, con la cual gana el sustento para ella, su hija y su madre, minutos más tarde en hechos confusos tumban la puerta de la vivienda y acto seguido ingresan unas personas que se identifican como unos funcionarios de la Policía Judicial e informan que es una diligencia de allanamiento, le piden guardar silencio y minutos más tarde dicen haber encontrado oculta en la cocina del inmueble una bolsa plástica que contiene 7 gramos de bazuco, por lo cual capturan a mi defendida, posteriormente llaman a la madre de mi prohijada y le hacen entrega de su menor hija, acto seguido trasladan a la señora SANTACRUZ TORRES, **junto con 5 personas más en calidad de capturados a las instalaciones policiales**, acto seguido la policía Judicial entrevista a algunas de las personas capturadas y después de esto dejan en libertad a las cinco personas capturadas e inician el proceso de judicialización de mi de mi prohijada.

Con el actuar de los funcionarios de la Policía Judicial, se evidencia una serie de violaciones de derechos fundamentales y protocolos de policía judicial establecidos para estos procedimientos, es evidente que en el informe de registro y allanamiento falta a la verdad, en el sentido que se consignó única y exclusivamente los elementos



que quiso el policía judicial con el ánimo de poder dejar en cabeza de una sola persona la responsabilidad de la sustancia prohibida incautada, máxime cuando se trataba de escasos 7 gramos de bazuco, que fueron encontrados de manera culta en un inmueble con el cual mi representada no tiene ninguna relación, circunstancias que quedaron demostradas con las pruebas producidas en el Juicio Oral.

7. Ante el JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA, el día 07 de noviembre de 2013 la Fiscal 05 Adscrita a la URI, presenta a mi representada para la legalización de la captura, la que es avalada por el fallador. (VER PRUEBA 2 – ACTA DE AUDIENCIA DE LEGALIZACIÓN DE CAPTURA Y OTRAS)

8. En la misma audiencia la Fiscalía le imputa cargos a la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, identificada con C.C. 1.117.352.332, en calidad de AUTORA del punible de TRÁFICO, FABRICACIÓN, PORTE DE ESTUPEFACIENTES, consagrado en el artículo 376 Inciso Segundo de la ley 599 del 2000 C.P., modificado por la ley 1453 de 2011. En dicha diligencia, la imputada **NO ACEPTÓ LOS**

**CARGOS,** (SIEMPRE TUVO CLARO QUE ERA INOCENTE Y ASÍ LO MANIFESTÓ).

FALLA la Fiscalía General de la Nación al imputar a mi defendida una conducta que desde el inicio se sabía que no había sido cometida por ella, es imperdonable que un Fiscal se atreva a señalar a una persona totalmente inocente, como responsable de un delito cuyos hechos a simple vista se puede concluir de los informes de Policía Judicial, se trataba de un procedimiento con las características propias de un falso positivo, máxime cuando el Fiscal es el llamado a realizar el primer control de legalidad al procedimiento tanto de allanamiento como el de captura.

En el caso en particular, no se concibe que el señor Fiscal no haya realizado una revisión minuciosa de las actuaciones de la policía Judicial, iniciando por la entrevista que debe hacer al capturado al momento que le es dejado a disposición mediante la verificación de los derechos del capturado, éste era el escenario para que el Fiscal evidenciara que en el inmueble fueron encontradas 7 personas de quienes uno (1) era la menor hija de mi representa y que fue entregada de forma irregular a la abuela, violando con esto lo establecido por la ley 1098 de 2006, donde es conocimiento de este honorable despacho que debió hacer presencia la policía de infancia y

adolescencia, haciendo el restablecimiento de derechos al menor por medio de bienestar familiar, en tal sentido, debió cuestionar el Fiscal el actuar de la Policía Judicial y realizar a fondo cada uno de los informes aportados.

Por otro lado, si es la libertad un derecho tan preciado de orden constitucional, no puede ser que se rinda un informe donde se diga que fueron encontrados en el inmueble 5 adultos diferentes a mi defendida y que al Fiscal solo le presenten a la señora SANTACRUZ TORRES y que el director de la investigación no se pregunte que sucedió con los demás, que no haya pensado en adelantar actos urgentes tendientes a establecer el motivo de la ubicación de mi defendida en el lugar de los hechos, máxime cuando ella desde el inicio manifestaba que se encontraba enseñando sus catálogos.

No quiso el Fiscal de turno establecer mediante labores de vecindario estas afirmaciones eran ciertas porque bastaba con un simple acto de investigación para establecerlo y no tener que iniciar todo un proceso en contra de una persona inocente, con esto queda demostrado que la Fiscalía lo que hizo fue respaldar una mentira consignada en un informe que lo único que pretendía era cumplir con una estadística como es normal en entidades como la policía nacional donde a diario no les exigen prevenir el delito si no cumplir con metas de capturas llevándolos a perpetrar falsos positivos, como si con esto se erradicaran tan graves problemas que aquejan nuestra sociedad.

9. A continuación, y ante la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de la imposición de medida de aseguramiento contra la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, la cual fue avalada por el fallador. (VER PRUEBA 2 -ACTA DE AUDIENCIA DE LEGALIZACIÓN DE CAPTURA Y OTRAS)

10. Con el actuar de las entidades DEMANDADAS en estas diligencias queda perfectamente demostrada la **FALLA** de la Fiscalía General de la Nación al solicitar la medida privativa de la libertad basada en toda una mentira de la Policía Judicial y aparece en este escenario gran la **FALLA** de la Nación – Rama Judicial en el momento en que accede a tal pedimento.

Es perfectamente claro que el Juez de Control de Garantías no cumplió con su función de salvaguardar los preceptos de orden constitucional a la hora de revisar

los informes de Policía judicial y los demás escasos EMP y/o EF que presentaba la Fiscalía para señalar como responsable del delito a una pobre mujer que estaba cumpliendo con su labor en compañía de su hija cuando el infortunio de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado frente a funcionarios que actuaban bajo la premisa de cumplir por una meta sin importar que tuviesen que extralimitar sus funciones, permite el Juez de Control de Garantías con esta situación que no solo que se inicie un calvario por estar privada de la libertad si no porque desde el día de la captura mi prohijada no pudo ver a su hija durante un periodo de aproximadamente 16 meses, en los cuales tuvo que soportar lo que nunca imagino que afrontaría en su vida y que no estaba obligada a soportar, no pudo el fallador establecer que en realidad mi defendida no representaba un peligro para la sociedad, no tenía antecedentes penales, ni mucho menos se daban las circunstancias que exige la Ley 906 de 2004 para privar de la libertad a una persona, razón por la cual, se configuró a cabalidad la figura de la privación injusta de la libertad en contra de la ciudadana JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES.

11. Yerran la Fiscalía y el Juzgado de Control de Garantías, al pasar por encima de la presunción de inocencia de la cual goza todo ciudadano colombiano y que es garantizado por nuestra Constitución Política, yendo en contravía del actuar garantista por el que deberían optar estas entidades, ya que se trata de un derecho tan preciado como lo es la LIBERTAD; y sin embargo deciden edificar todo un proceso penal en contra de JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES iniciando así un calvario no sólo para ella, sino también para su familia.

12. El día 20 de marzo de 2015, el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE TULUÁ VALLE, realizó audiencia de juicio oral, en la que mi representada acepta ser interrogada en esta audiencia y manifiesta que ella es vendedora de catálogos por revistas, y que para el día de los hechos se encontraba realizando su labor en la casa donde presuntamente se estaba guardando droga, situación que era plenamente desconocida por ésta, así textualmente lo indicó:

*“PREGUNTADO: podría decirme usted donde se encontraba ese día. RESPONDE: ese día me encontraba a las 7:15 de la noche vendiendo catálogos de casa en casa...la casa donde me encontraron los policía....recuerdo que el barrio es el Rojas. PREGUNTADO: **conoce usted al morador de esa residencia donde usted estaba.** RESPONDE: **no lo conozco.** PREGUNTADO: quien le abrió la puerta de esa residencia. RESPONDE: no conozco. Toco yo a la vivienda y le digo que si está interesada en vender catálogos por revista, la señora me deja entrar y*

me dice que me siente y le explique los beneficios. PREGUNTADO: **donde se encuentra su residencia.** RESPONDE: **mi residencia es carrera 22 # 9-08 barrio municipal....vivo allí con mi madre y mi hija.** PREGUNTADO: **ese día estaba yo vendiendo los catálogos con mi hija y entré a esa casa y estando allí tumba la puerta la policía y nos llevan a todos para la permanencia...** (negrilla fuera de texto). (VER PRUEBA 3 – CD AUDIENCIA DE SENTIDO DE FALLO)

Resulta imperdonable que tanto el Fiscal como el Juez d Control de Garantías hayan permitido y apoyado una injusticia tan grande como la que se cometió privando de la libertad a una persona inocente durante tanto tiempo, con esto queda en evidencia que mi defendida siempre tuvo la razón al no aceptar cargos pues ella no vivía en esta residencia donde fue capturada por funcionarios de la Policía Nacional, no sabía nada de los presuntos ilícitos que se estaban cometiendo, lo único que estaba haciendo era trabajando para ganarse el sustento diario para su hija menor de edad y su madre, ya que ella es quien vela por el sustento de esta inocente familia.

13. Seguidamente el Juez, da sentido de fallo, aduciendo que:

*“...la fiscalía no aportó ningún elemento de prueba que antes de hacer el allanamiento, ya que les habían manifestado bajo esta formula...”informe de fuente no formal” de manera que cualquier cosa es el origen del informe...debió la fiscalía...poder probar más adelante quien eran los moradores de la vivienda, pero la fiscalía no introdujo ningún elemento frente a ello...*

*No existe una prueba contundente que permita determinar más allá de toda duda razonable conforme lo demanda el art. 381 del C.P., en su parte final que la única responsable del inmueble fuera la hoy procesada porque la fiscalía no hizo ningún esfuerzo para probar este aspecto que resultaba fundamental para poder deducirle responsabilidad sólo a ella y excluir a las otras 5 personas, este proceso lo hizo fue la policía en el momento de la captura, este asunto se está decidiendo hoy en esta sala pero la policía ya lo había decidido, en ese momento decidió que las otras cinco personas eran inocentes y que la única culpable era la persona aquí, de adonde saco la policía eso, no sabemos pero ya lo había decidido excluyó 5 personas del delito y sólo dejó a una, seguramente les pareció que llevar a cinco personas por siete gramos de bazuco no era como muy presentable porque si reparten la droga entre los siete (7) no les da para poder acusar ya que la dosis mínima es de un gramo entonces no habría delito alguno que perseguir, entonces por eso se excluyen las otras personas... entonces este asunto como lo expone el despacho ya había sido decidido desde el mismo seis de noviembre del 2013 por la policía sin ningún problema o sea fueron fiscales, fueron jueces y decidieron que la única que iba a responder era la señora*



***Lorena... debe darse aplicación al artículo séptimo del código de procedimiento penal y declarar que en favor de la procesada milita el axioma universal del derecho penal del INDUBIO PRO REO y el fallo habrá de ser de carácter absolutorio*** (Negrilla de este togado) (VER PRUEBA 3 – CD AUDIENCIA DE SENTIDO DE FALLO)

En esta oportunidad el Juez de conocimiento evidenció que fueron los funcionarios de la Policía Nacional, quienes inician una serie de violaciones a los preceptos constitucionales, en especial a la presunción de inocencia al señalar a la señora SANTACRUZ TORRES, como única responsable de la conducta punible, usurpando la función de Fiscalía y del Juez de Control de Garantías, con esto queda claro que desde esta etapa del proceso en adelante todas las actuaciones realizadas por la Policía Judicial estaban llamadas a no ser tenidas en cuenta en el proceso en virtud de la cláusula de exclusión probatoria.

14. Con lo anterior, se nota la omisión de una buena investigación por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, al expedir una orden de allanamiento basada en una mentira de la policía judicial, omitió el director de la investigación establecer contacto con el origen de la investigación y no simplemente actuar a ciegas y guiado por informes falsos que lo único que pretendían era cumplir con estadísticas de la Policía Nacional, olvidó el fiscal que cuenta con todos los recursos económicos y humanos, que se inicia y da lugar a una responsabilidad patrimonial del Estado, es también la omisión por parte de los representantes de la RAMA JUDICIAL, de darle una correcta valoración al material probatorio que aporta la Fiscalía al momento de solicitar la privación de la libertad de una persona, son responsables del tiempo de privación que mi PROHIJADA JAMÁS PODRÁ RECUPERAR.

15. **FALLA** la Fiscalía al no esclarecer los hechos objeto de debate en el proceso penal, máxime cuando es el Fiscal quien durante todo el proceso penal tiene contacto con los EMP recolectados y pudo advertir la inocencia de mi representada, pero aun así no quiso desde el inicio solicitar la preclusión de la investigación para así no llevar a un desgaste innecesario del aparato jurisdiccional, como tampoco adoptó un programa metodológico, utilizando los diversos actos de investigación enfocado en conocer lo que realmente ocurrió, y sumado al conocimiento desde su inicio que la conducta desplegada por mi poderdante realmente no constituía una afectación al bien jurídico tutelado, decide judicializarla y solicitar medida de aseguramiento en centro carcelario, acarreándole a mi cliente y a su familia una serie de daños y perjuicios que no estaba en la obligación de soportar.

16. Esta privación de la libertad planeada por la Policía Judicial, orquestada por la Fiscalía y avalada por la Rama Judicial, ocasionó una serie de daños patrimoniales y extrapatrimoniales que deben ser indemnizados, a raíz de lo injusto de dicha privación. **INSISTO, BRILLA POR SU AUSENCIA LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA EN CABEZA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.**

17. La Fiscalía General de la Nación a lo largo del proceso penal iniciado en contra de la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, transgredió los artículos 66 y 114 de la Ley 906 de 2004, en consideración a que omitió su deber INVESTIGATIVO, lo que trajo como consecuencia la PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD del mencionado, pues si previo a solicitar la medida de aseguramiento se hubiera adoptado un adecuado PROGRAMA METODOLÓGICO, que permitiera recaudar la totalidad de elementos materiales de prueba para así lograr acreditar la comisión de la conducta punible más allá de toda duda razonable. Lo que más asombra, es el hecho de que una persona que trabaja humilde y honradamente haya tenido que pasar por todo un proceso penal iniciado de manera injusta y arbitraria por parte de los entes demandados, con ocasión al actuar negligente y descarado de sus funcionarios. La Fiscalía al imputarle cargos y solicitar medida de aseguramiento en centro carcelario y la Rama Judicial a través del Juez de Control de Garantías, al permitirlo.

18. El día 20 de mayo de 2015, se realiza audiencia en la cual se dicta sentencia absolutoria, por parte del JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE TULUÁ VALLE, en la que se compulsan copias a los agentes de la Policía Nacional que realizaron la captura de mi prohijada, por parte del fallador, manifestando en la misma que:

“(…)

**los agentes del orden ocultaron información decisiva en su informe, lo que también debe dársele la connotación de haber mentido en dicho informe, ya que ocultar la verdad es una forma de mentir, pues en este consignaron que sólo se encontraba en el inmueble la acusada y otras personas pero no dijeron que pasó sobre las otras personas, no se consignaron la edad... los agentes captores decidieron colocarse la toga de magistrado para decidir en ese momento quien debía responder por el presunto punible y quien no llevándose de contera no menos de cuatro o cinco tipos penales empezando por el de falsedad...** ” (VER PRUEBA 4- AUDIENCIA DE SENTENCIA ABSOLUTORIA)

De lo anteriormente citado, se insiste al honorable despacho que debe castigarse le actuar extralimitado y doloso de la Policía Judicial al consignar hechos fuera de la realidad en un informe que tiene el carácter de documento público, pero lo que resulta más gravoso es que dicha falsedad conllevara a la privación injusta de la libertad de una persona que hacer de un proceso penal

19. De esta forma quedó declarada de manera oficial la INOCENCIA de la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, y es menester hacer hincapié sobre la privación injusta de la libertad de la que fue objeto, que se configuró entre el 07 de noviembre de 2013 y el 20 de marzo de 2015, es decir **1 año, 4 meses 13 días**, en los cuales sufrió todo tipo de vejámenes, con todas las implicaciones que esto le acarreó, así como la tristeza que le embargaba al estar lejos de su familia, de su madre, de su hermana, sabiendo que desde un principio no tenía por qué estar privado de su libertad, situaciones que el procesado no estaba en la obligación de soportar. (VER PRUEBA 5– CERTIFICADO DE LIBERTAD).

20. El daño que el Estado le ocasionó a la aquí demandante y a su familia debe ser calificado como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación para el Estado de resarcir los daños causados a ésta.

21. El día 17 de marzo de 2017 se radicó la respectiva solicitud de conciliación ante la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos de Pereira, y ésta fue remitida por competencia a la Procuraduría 60 Judicial I de Cali Valle, como requisito de procedibilidad para incoar la presente demanda.

22. El día 15 de mayo de 2017 siendo las 2:00 p.m. en el Despacho de la Procuraduría 60 Judicial I para Asuntos Administrativos de Cali Valle, se procedió a iniciar con la audiencia de conciliación solicitada, diligencia en la que quedó clara la posición de la parte ahora demandada de NO CONCILIAR, razón por, se levantó el acta correspondiente, quedando así cumplido el requisito de procedibilidad de la presente acción administrativa. (VER ANEXO 6 – CONSTANCIA DE NO CONCILIACIÓN).

## FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES

La responsabilidad patrimonial del Estado, se encuentra consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, el cual dispone:

**“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.**

*En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra...”*

La Corte Constitucional ha considerado como elementos de responsabilidad del Estado los siguientes: “...Con fundamento en este postulado de principio, el instituto resarcitorio se configura siempre y cuando: (i) ocurra **un daño antijurídico o lesión**, (ii) **éste sea imputable a la acción u omisión de un ente público** y (ii) **exista una relación de causalidad entre el daño y la acción u omisión del ente público**; ampliándose de este modo el espectro de la responsabilidad estatal al superar el postulado inicial de la falla en el servicio, para adentrarse en el ámbito del **daño antijurídico**-entendido como aquél daño patrimonial o extrapatrimonial que se causa en forma lícita o ilícita al ciudadano, **sin que éste se encuentre en la obligación jurídica de soportarlo**.” (Subrayado y negrilla fuera de texto)<sup>2</sup>

En el derecho Español, se establece una cláusula de responsabilidad del Estado, similar a la contenida en el artículo 90 de nuestra Constitución Política, al respecto la doctrina internacional ha manifestado: “...Está claro también y no es objeto de discusión alguna que la responsabilidad patrimonial de la administración puede surgir tanto de una actividad jurídica, ya se plasme en un acto administrativo o en un reglamento, como de una actividad puramente material o técnica o, incluso, de una simple omisión. Cada uno de estos supuestos puede dar lugar, ciertamente, a particularidades y justificar matizaciones de diverso tipo, pero el principio en sí mismo no es discutible.”<sup>3</sup>.

Es importante y pertinente recalcar que las decisiones de los Jueces de la República, deben fundarse en las pruebas legalmente aportadas y debatidas en el proceso. Al respecto, el Código de Procedimiento Penal estipula en su artículo 7, como principio fundamental del proceso penal colombiano que **“para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad más allá de toda duda”**; de igual manera el artículo 381 del Código de procedimiento penal ordena que **“para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, a cerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio.”** (negrilla propio),

<sup>2</sup> Sentencia C-619 de 2002

<sup>3</sup> EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA – TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ. Curso de Derecho Administrativo Tomo II. 12ª. Ed. Bogotá: Editorial Temis. 2008, pp. 359.  
La libertad es un



Requisitos que no son otros que el convencimiento no solo en la materialidad de la conducta punible sino en la responsabilidad de la procesada, por ello, es menester reiterar, que en el presente caso el ente acusador en ningún momento del proceso logró demostrar la responsabilidad penal de la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, tal y como lo manifestó el Juez en audiencia de sentido de fallo, lo reiteró en la lectura del mismo, y como consecuencia de esto se obtiene la sentencia absolutoria y por ende la extinción de la acción penal, por lo que este caso se debe analizar bajo **el régimen objetivo de responsabilidad del estado**. Tal y como lo ha indicado de manera clara y concreta el H. Consejo de Estado mediante **sentencia de unificación** en Sala Plena de la Sección Tercera, expediente 23.354, del 17 de octubre de 2013, Consejero Ponente *MAURICIO FAJARDO GÓMEZ*, en la que se refiere específicamente al régimen de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad resueltos con fundamento en alguna de las causales contempladas en el derogado decreto ley 2700 de 1991, artículo 414.

*“Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, **el sindicado no lo cometió**, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.*

En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.

Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo.

*Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.*

**“2.3 Régimen de responsabilidad aplicable en materia de privación de la libertad de las personas sujetas a detención preventiva dentro de un proceso penal, a quienes**

posteriormente se exonera de responsabilidad mediante sentencia absolutoria o pronunciamiento equivalente.”

*“La Sala amplió la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente con base en un título objetivo de imputación, a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la respectiva medida de aseguramiento”*

Continuando con la sentencia del Honorable Consejo de Estado en cita, se lee:

*(..)una clara tendencia orientada a allanar el camino hacia la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, en línea de principio, a supuestos en los cuales una persona se ve privada de la libertad por orden de autoridad judicial dentro de un proceso penal y posteriormente resulta exonerada de responsabilidad dentro de dicho plenario, particularmente cuando la aludida exoneración encuentra sustento en la duda que debe ser resuelta en favor del sindicado*

En ese mismo sentido se pronunció la Sala en sentencia del 4 de diciembre de 2006, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Radicado: 25000-23-26-000-1994-09817-01, expediente: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua Panche y otros. Demandado: Nación-Ministerio de Justicia, en la cual se expresó que:

*“...aunque la medida de aseguramiento se hubiere proferido con estricto apego a las exigencias y requisitos establecidos en las normas vigentes, la posterior absolución del procesado determina que, salvo que se acredite la concurrencia de una causal eximente de responsabilidad como el hecho exclusivo y determinante de la víctima, ésta no tiene el deber jurídico de soportar los daños que la detención le irroga, “[Y] esa consideración no se modifica por el hecho de que la absolución se haya derivado de la aplicación del multicitado principio “in dubio pro reo”, pues la operatividad del mismo en el sub júdice no provee de justo título —ex post— a una privación de libertad por tan prolongado período, si el resultado del proceso, a su culminación y de cara a la situación del aquí demandante, continuó siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido.” no pudo desvirtuarse que se trataba de una persona inocente”*

En concordancia con lo expuesto, resulta lo suficientemente claro para el Honorable Despacho que el TITULO DE RESPONSABILIDAD aplicable al caso particular y

concreto de la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, no es otro que el régimen de responsabilidad objetivo, al haberse edificado su libertad en la causal de exoneración de **“Indubio Pro Reo”**.

Específicamente en el tema de responsabilidad del Estado estructurado en el artículo 90 Constitucional, en tratándose de casos de privación injusta de la libertad ha dicho:

*“No resulta constitucionalmente viable ni argumentativamente plausible, en consecuencia, sostener que un precepto con fuerza de ley —como el Decreto 2700 de 1991, concretamente en su artículo 414— pudiere contar con la virtualidad necesaria para restringir los alcances que a la responsabilidad del Estado le vienen determinados directamente desde el artículo 90 de la Carta Política, pues según lo han señalado tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, los parámetros a los cuales se ciñe la responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas son los estructurados por el artículo 90 de la Carta, que pueden ser precisados, mas no limitados, por una norma infraconstitucional; en otros términos y “[E]n definitiva, no resultan compatibles con el artículo 90 de la Constitución, interpretaciones de normas infraconstitucionales que restrinjan la cláusula general de responsabilidad que aquel contiene por consiguiente, ni el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 ni alguna otra disposición de naturaleza legal podría constituir el fundamento único de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Tales dispositivos legales podrían precisar, pero de ninguna manera limitar y menos reemplazar la eficacia directa, vinculante y preferente de los dictados que contiene el artículo 90 de la Constitución Política”<sup>4</sup>*

Es que la detención preventiva representa la más intensa afectación al derecho a la libertad por lo tanto su aplicación debe ser excepcional, es decir y con base en la misma sentencia proferida por el Honorable Consejo de Estado, después de la vida es LA LIBERTAD el derecho fundamental máspreciado. Es por esta razón que siempre en un proceso penal el indiciado cuenta con la garantía fundamental de la presunción de inocencia.

***“la presunción constitucional de inocencia, como garantía consustancial a la condición humana y de la cual, en este tipo de casos, el sindicado goza al momento de ser detenido, la mantiene durante todo el tiempo por el cual se prolonga su privación de la libertad y, en la medida en que nunca puede ser desvirtuada por el Estado, cuando se pone término, definitivamente, al procedimiento penal, la conserva incólume, de manera tal que, sin solución de continuidad, una persona a la que la Carta Política le atribuye y le ha mantenido, sin ambages, la condición de inocente, tuvo que soportar***

<sup>4</sup> Sentencia 1997-01514 de abril 9 de 2014, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Radicación: 30879, Consejera Ponente: Olga Mélida Valle de De La Hoz, Actor: Elkin Alfonso Heredia Pérez y otros.



**—*injusta y antijurídicamente*— quizás la más aflictiva de las restricciones a su derecho fundamental a la libertad”<sup>5</sup>**

Es que después de la vida, el derecho a la libertad constituye un fundamento y presupuesto indispensable para que resulte posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular todo individuo.

Siguiendo con nuestro análisis, el carácter de excepcionalidad de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, ha sido distinguido y reiterado en jurisprudencia, como se ve en la sentencia de unificación referenciada del 17 de octubre de 2013, en este caso la sentencia predica que **“en modo alguno podría exigírsele a un individuo que asuma como una carga social normal o jurídica una situación que por definición es excepcional”**, ya que si se realiza se demuestra la antijuridicidad de daño irrogado al detenido que posteriormente es absuelto de responsabilidad.

En este sentido, y a manera de concusión, se aplica el régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado que ha sido privado de la libertad finalmente **es absuelto** o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso a que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que **“i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica.**

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada por la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, *del principio universal in dubio pro reo* por manera que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la labor investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, **lo cierto es que si el imputado no resulta condenado,**

<sup>5</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez, 2 de mayo de 2007, Radicación número: 73001-23-31-000-1997-15879-01(15989), Actor: FANNY ORTEGON NAVARRO Y OTROS.



**se abre paso al reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de sopórtalos**". (...)

La libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo las condiciones de orden constitucional o legal; en el evento de restringir ese derecho; acorde a la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, promulgada el 15 de marzo de 1996 en su artículo 68 establece: **"Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios."**

Respecto del artículo en mención, el Consejero de Estado doctor Enrique Gil Botero, como ponente del fallo del 5 de junio de 2008 manifiesta:

*"...la Sala ha considerado que su interpretación no se agota en la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando ésta sea ilegal o arbitraria. **En jurisprudencia reciente<sup>6</sup>, se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, contempladas en el derogado artículo 414 del decreto 2700 de 1991, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad en las cuales se haya arribado a cualquiera de los tres supuestos a los que hacía referencia la citada disposición. Es decir, que después de la entrada en vigencia de la ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta 'porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible', se configura un evento de detención injusta. A las hipótesis citadas se les ha agregado el evento de absolución en aplicación del in dubio pro reo**"*

A su turno el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 establece:

**"ARTICULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.** El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

*En los términos del inciso anterior **el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad**."* (Resaltado fuera del texto)

Al respecto, se lee la sentencia de unificación proferida la Sala Plena de la Sección Tercera, el 6 de abril de 2011, expediente 21.653, que señala:

<sup>6</sup> Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2007, expediente: 15.463.

“se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos consagrados en el artículo 414 del C.P.P., y en la Ley 270 de 1996”

Continuando con esta postura, en reciente sentencia proferida por el Honorable Consejo De Estado, con radicado No. 76001-23-31-000-2001-02770-02(33442), calendada 27 de enero de 2016, Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA, se precisó:

“... en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o -en la opinión mayoritaria de la Sala- a la aplicación de la figura del *in dubio pro reo*, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a éstos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla.

(...) “En ese contexto, se concluye que, cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, por alguna de las causales previstas en el citado artículo 414 del C. de P. P. -sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima-, las cuales se aplican a pesar de la derogatoria de la norma, o –en la opinión mayoritaria de la Sala- por virtud del *in dubio pro reo*, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga” (...)

Siguiendo con nuestro análisis de la sentencia del año 2016, es importante resaltar lo dicho por el Consejo de Estado, frente a una privación injusta de la libertad cuando el ciudadano no ha cometido el delito:

“(...) el criterio que rige actualmente los pronunciamientos de esta Corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es el de la procedencia del deber indemnizatorio cuando (i) el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió o (iii) la conducta no constituía conducta punible de conformidad con sentencia absolutoria o su equivalente:

(...) quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, **sin necesidad**

de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta. (subrayado propio)

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicato, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicato no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicato, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél.

Es que la privación de la libertad demanda una investigación eficiente, proclive a respetar el derecho constitucional fundamental del sindicato, por lo que si el Estado no obstante la inocencia, lo privó de su libertad, debe responder por los perjuicios ocasionados

Cabe además señalar que la valoración de la sentencia penal absolutoria o su equivalente comporta la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 superior) en el entendido de que independientemente de las razones que se consignen en la providencia para justificar la decisión, ya sea con fundamento expreso de algunas de los eventos inicialmente previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 o del in dubio pro reo, se habrá de contrastar dicha providencia con las conclusiones a las que resulten de la lectura atenta del expediente, es decir, corresponde verificar si la decisión absolutoria que se apoya en un in dubio pro reo, oculta una de las causales establecidas en el artículo 414 ibídem.

Como puede observarse, dentro de la regla general consolidada jurisprudencialmente, la responsabilidad de la administración por la privación injusta de la libertad ha sido desarrollada de tal manera que, a menos que opere la causal de exoneración específica para estos eventos, como es el dolo o la culpa grave de la víctima, o en los términos del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuando “se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido”.

Con las nutridas citas jurisprudenciales puestas en conocimiento del despacho, se llega a la conclusión que el caso objeto de *litis*, debe ser analizado bajo un régimen de responsabilidad objetivo, y que al ser dictada la respectiva sentencia ABSOLUTORIA en el caso de la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política.



No obstante lo anterior, la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado<sup>7</sup> ha sido clara al señalar que cuando en el caso objeto de estudio se vislumbran FALLAS ADMINISTRATIVAS endilgadas a las entidades llamadas a responder administrativa y patrimonialmente, tal y como sucede en el caso particular y concreto en el que se presentó una PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD a título de ERROR JUDICIAL Y DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, debe primar el régimen de responsabilidad SUBJETIVO, esto es, el de FALLA EN EL SERVICIO, porque además de efectuarse una condena patrimonial, **DEBE HACERSE UN JUICIO DE REPROCHE FRENTE AL ACTUAR DE LAS ENTIDADES OBJETO DE DEMANDA**, así textualmente lo señaló en pronunciamiento del 25 de enero de 2017<sup>8</sup>:

*“Sin embargo, la Sala estima que, en este asunto, el régimen de responsabilidad aplicable es el de carácter subjetivo, dada la necesidad de, además de emitir una condena patrimonial en contra del Estado, efectuar un juicio de reproche sobre el proceder de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que, contrario a lo señalado en el recurso de apelación, la privación de la libertad del señor Flórez Pomares se ordenó pese a que no se cumplían los requisitos establecidos para tal fin(...)*

*En efecto, esta Subsección ha precisado que, si la restricción de la libertad es consecuencia de una decisión judicial equívoca, la responsabilidad patrimonial del ente investigador surge bajo el título de imputación denominado error judicial y no por privación injusta de la libertad:*

*“3.3.- Con fundamento en lo hasta ahora expuesto y traído a colación de la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a los alcances de los títulos de imputación de error jurisdiccional y de privación injusta de la libertad, esta Sala considera que en aquellos eventos en los cuales los daños cuya reparación reclaman los ciudadanos tienen origen en un yerro contenido en la providencia judicial mediante la cual se ordenó una medida de aseguramiento que conduce a la privación de la libertad del(los) sindicado(s), si bien es verdad que podría pensarse que el efecto al cual conduce la materialización de lo decidido en la providencia respectiva –la*

<sup>7</sup> Al respecto se leen las siguientes sentencias: 25 de enero de 2017 M.P. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Rad. No. 17001-23-31-000-2005-02622-01(44963), sentencia del 30 de junio de 2016, M.P. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Rad. No. 73001-23-31-000-2006-00379-01(40720), sentencia del 25 de enero de 2017, M.P. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Rad. No. 47001-23-31-000-2008-00378-01(45343),

<sup>8</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Subsección A, Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, 25 de enero de 2017, Radicación número: 47001-23-31-000-2008-00378-01(45343), Actor: LUIS EMIGDIO FLÓREZ POMARES Y OTROS, Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN



restricción de la libertad física de la persona– determina que ha de ser el de privación injusta de la libertad previsto en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 el título de imputación a aplicar, lo cierto es que el encarcelamiento del individuo investigado no habría tenido lugar en caso de no haberse dictado, dentro del proceso penal respectivo, la decisión en la cual concurre la particularidad de resultar ‘contraria a la ley’, en los términos de lo normado en la última frase del artículo 66 de la Ley 270 de 1996.

“Quiere lo anterior significar que, a juicio de la Sala, en aquellos eventos en los cuales se produce una falla en el servicio público de Administración de Justicia consistente en que se profirió una providencia judicial mediante la cual se decretó una medida de aseguramiento que conduce a la privación de la libertad de un individuo y dicha providencia resulta contraria al ordenamiento jurídico, el título de imputación a aplicar ha de ser el de error judicial y no el de privación injusta de la libertad. En ese sentido, el primero de los títulos de imputación está acompañado del rasgo de la especialidad respecto del segundo, en la medida en que el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 no efectúa distinción de tipo alguno respecto del tipo de providencia en la cual debe presentarse la contrariedad entre lo en ella decidido y las normas en las cuales debe fundarse, para efectos de concluir en la aplicabilidad del título de imputación de error jurisdiccional.

“Así pues, por resultar encuadrables las providencias que en contravía del ordenamiento jurídico decretan medidas de aseguramiento dentro de los procesos penales, en la descripción que efectúa el artículo 66 en mención del error jurisdiccional como ‘aquél cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley’, es dicho título de imputación el que debe aplicarse en los referidos supuestos y no el de privación injusta de la libertad, adicionalmente si se tiene en cuenta que este último, como es bien sabido, se describe en el artículo 68 del mismo conjunto normativo de un modo mucho más genérico e inespecífico”<sup>9</sup> (Se destaca).

(...)

Así las cosas, lo que le correspondía a la Fiscalía General de la Nación era adelantar la actividad investigativa a fin de recaudar en debida forma las pruebas que permitieran esclarecer los hechos; empero, omitió proceder de conformidad y, en su lugar, valoró las grabaciones telefónicas aportadas por el Personero Distrital de Santa Marta, las cuales, como antes se precisó,

<sup>9</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de mayo de 2014, expediente No. 23.783; Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, reiterada en sentencia del 29 de mayo de 2014 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente: 27.903; M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón (E), entre otras providencias.

**además de haber sido obtenidas de manera ilícita, no relacionaban al demandante con los delitos por los que se le procesó.**

**En este orden de ideas, es claro que el ente acusador infringió sus deberes funcionales en el ejercicio de la acción penal, porque, se insiste, no examinó con el debido rigor las piezas procesales obrantes en el expediente, ni ordenó adicionales para establecer la relación del señor Flórez Pomares con la sustracción y cobro fraudulento de varios cheques provenientes de la cuenta bancaria de la Personería Distrital de Santa Marta, lo que hubiera impedido su detención preventiva.**

Las falencias mencionadas fueron advertidas al momento de resolverse sobre la legalidad de la medida de aseguramiento, oportunidad en la que de manera enfática se señaló que en la investigación penal se dio valor probatorio, pese a que carecían de este, a unas grabaciones telefónicas ilegales, lo que llevó a que se pasara por alto la inexistencia de elementos que dieran cuenta de la responsabilidad del señor Flórez Pomares.

**En suma, se encuentra probado que la detención preventiva del señor Luis Emigdio Flórez Pomares, dada la ausencia de elementos materiales probatorios que lo incriminaran, se presentó como consecuencia de un error jurisdiccional imputable a la providencia por medio de la cual la Fiscalía General de la Nación definió su situación jurídica y le impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva.”** (Resaltado es nuestro)

Así pues, concluyo este capítulo solicitando que, en virtud del principio *IURA NOVI CURIA*, sea el honorable Fallador quien, con la aplicación correcta del régimen de responsabilidad y la valoración probatoria proceda a determinar la responsabilidad administrativa y patrimonial, que lleve a la consecuente indemnización de los hoy DEMANDANTES.

## PRETENSIONES

1. Declarar administrativa y patrimonialmente responsables, de forma solidaria, a LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, NACIÓN – RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO, NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, representadas por el Fiscal General de la Nación, el señor Néstor Humberto Martínez Neira, el Director de la Rama Judicial, los Directores de la Policía Nacional, respectivamente, o quienes hagan sus veces, por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES,

en el lapso comprendido entre el 07 de noviembre de 2013 y el 20 de marzo de 2015, así como las implicaciones que dicha privación le ha generado hasta el momento a toda la familia.

2. Como consecuencia de la anterior declaración se reconozca e indemnice lo siguiente:

### 2.1 PERJUICIOS MORALES.

Reconocer y pagar a favor de:

- JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.794.321, en calidad de VÍCTIMA DIRECTA, la suma de DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES SMLMV.
- GERALDIN MUÑOZ SANTACRUZ, identificada con el registro civil No. 1.117.352.332 (HIJA DE LA VÍCTIMA), la suma de DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES SMLMV.
- MARÍA LIDA TORRES GRAJALES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.755.958 (MADRE DE LA VÍCTIMA), la suma de DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES SMLMV.
- MARY LUZ HERNÁNDEZ TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.116.256.005 (HERMANA DE LA VÍCTIMA), la suma de CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES SMLMV.
- VALERY OCAMPO HERNÁNDEZ, identificada con el registro civil No. 1.117.355.581 (SOBRINA DE LA VÍCTIMA), la suma de SETENTA (70) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES SMLMV.
- SARA SOFÍA OCAMPO HERNÁNDEZ, identificada con el registro civil No. 1.117.352.626 (SOBRINA DE LA VÍCTIMA), la suma de SETENTA (70) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES SMLMV.

El salario mínimo aplicable será el fijado para la anualidad en la que quede en firme la sentencia que ponga fin al proceso.

## **2.2 DAÑO INMATERIAL POR AFECTACIÓN RELEVANTE A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS.**

A título de reparación integral solicito que las entidades DEMANDADAS:

1. Publiquen en diario de amplia circulación nacional, la sentencia condenatoria.
2. Pidan excusas públicas en el municipio de TULUÁ VALLE por los hechos ocurridos.
3. Garantice la atención médica y psicológica de forma permanente a JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES.
4. Divulgar en las Fiscalías, Juzgados, Tribunales y Dependencias Judiciales, el contenido de la providencia condenatoria.
5. Implemente campañas al interior de la Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial que eviten este tipo de injusticias.

Con lo anterior se busca honrar la tragedia ocasionada a JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, brindar garantías de una vida integra y normal, generar un estado de reconciliación por parte de sus familiares; así como buscar medidas de no repetición con la población.

Teniendo en cuenta que las medidas solicitadas no son suficientes para reparar de forma integral el grupo familiar demandante, y en el entendido que existe la obligación de indemnizar los daños inmateriales por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados de manera separada al constituirse en una nueva categoría de perjuicios, como se expone en el acápite de “FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIALES DE LOS PERJUICIOS MATERIALES E INMATERIALES”, solicito reconocer y pagar a favor de:

- JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.794.321, en calidad de VÍCTIMA DIRECTA, la suma de



DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES SMLMV.

- GERALDIN MUÑOZ SANTACRUZ, identificada con el registro civil No. 1.117.352.332 (HIJA DE LA VÍCTIMA), la suma de DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES SMLMV.
- MARÍA LIDA TORRES GRAJALES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.755.958 (MADRE DE LA VÍCTIMA), la suma de DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES SMLMV.

### **2.3 POR DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, ALTERACIÓN GRAVE A LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA.**

Reconocer y pagar a favor de:

- JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.794.321, en calidad de VÍCTIMA DIRECTA, la suma de DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES SMLMV.
- GERALDIN MUÑOZ SANTACRUZ, identificada con el registro civil No. 1.117.352.332 (HIJA DE LA VÍCTIMA), la suma de DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES SMLMV.
- MARÍA LIDA TORRES GRAJALES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.755.958 (MADRE DE LA VÍCTIMA), la suma de DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES SMLMV.

### **2.4. POR LESIÓN A LA HONRA, EL HONOR Y EL BUEN NOMBRE**

- Reconocer y pagar, como daño autónomo e independiente, a favor de JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.794.321, en calidad de VÍCTIMA DIRECTA, la suma de DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES SMLMV.

## 2.5. POR LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

- Reconocer y pagar, como daño autónomo e independiente, a favor de JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.794.321, en calidad de VÍCTIMA DIRECTA, la suma de DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES SMLMV.

## 2.6 POR DAÑOS A LA SALUD

- Reconocer y pagar, como daño autónomo e independiente, a favor de JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.794.321, en calidad de VÍCTIMA DIRECTA, la suma de DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES SMLMV.

## 2.7 PERJUICIOS MATERIALES

### LUCRO CESANTE

Se solicita que se condene a las entidades DEMANDADAS a pagar indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES (Víctima), la suma que se obtiene de calcular los salarios dejados de percibir de sus actividades informales, por el término que estuvo privada de la libertad, equivalentes a **\$24.638.750<sup>10</sup>**.

**3. POR INTERESES:** Se cancelarán al demandante, o a quien o quienes sus derechos representaren al momento del fallo, los intereses que se generen a partir de la fecha de la sentencia o del auto aprobatorio de la conciliación judicial.

De conformidad con el art. 1653 del C.C. todo pago se imputará primero a intereses. En cuanto a los intereses se observarán las siguientes normas: el art. 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone “Las

<sup>10</sup> Dicho guarismo se obtiene al aplicar la fórmula pertinente aprobada por el H. Consejo de Estado, tal y como se expone en el capítulo “FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIALES DE LAS PRETENSIONES” en el acápite “PERJUICIOS MATERIALES – LUCRO CESANTE”

sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inc. 2 del art. 192 de este código o el de los cinco (05) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la tasa comercial” (inc. 4 art. 195); y el art. 192 del mismo código que señala que las cantidades liquidas reconocidas en la sentencia o en el auto que apruebe conciliación “devengarán intereses moratorios” a partir de la ejecutoria de la sentencia o del auto (inc. 3 art. 192)

**4. CONDENA EN COSTAS.** Según el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo, condénese a los entes públicos demandados, si resultaren vencidos en la presente litis, a cancelar las costas y agencias en derecho correspondientes en los términos del art. 361 del Código General del Proceso.

**5. CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA.** Los entes públicos demandados, darán cumplimiento a la sentencia dentro de los diez (10) meses siguientes a la fecha de su ejecutoria, de conformidad con el inc. 2 del art. 192 del Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo, que determina: “Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia”, quedando la parte demandante obligada a la presentación de la solicitud de pago correspondiente.

## **FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y JURISPRUDENCIALES DE LOS PERJUICIOS MATERIALES E INMATERIALES**

Téngase en cuenta lo dicho por la Corte Constitucional, en lo referente al precedente judicial, tal y como lo indica la sentencia T- 441 de 2003:

*“el desconocimiento del precedente, torna inconstitucional la decisión judicial, por cuanto desconoce los principios de igualdad y seguridad, aunque los jueces ordinarios gozan de un razonable margen de apreciación, cuya intensidad es mayor frente a los asuntos fácticos y decrece frente al propio precedente y termina en la sujeción al precedente de los órganos de cierre y al que, en materia constitucional,*

*fije la Corte Constitucional”*

Se insiste en la aplicación del **PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL VIGENTE**, concediendo los máximos jurisprudenciales:

❖ **PERJUICIOS MORALES**

Solicito respetuosamente que se tenga en cuenta la sentencia de unificación **NO. 31170 DE 28-8-14. CONSEJO DE ESTADO**, en donde se estableció la forma en que se deben de tasar los perjuicios morales acorde a la intensidad de los mismos y el lazo afectivo y de consanguinidad, definiendo dicho perjuicio así:

*“2. PERJUICIO MORAL El concepto se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc. Que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo”*

**“2.4 REGLAS DE EXCEPCIÓN PARA TODOS LOS CASOS DE DAÑOS MORALES** En casos excepcionales, como los de graves violaciones a los derechos humanos, entre otros, podrá otorgarse una indemnización mayor de la señalada en todos los eventos anteriores, **cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral sin que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar el triple de los montos indemnizatorios antes señalados.** Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño. (Subrayado propio)

Es evidente que la privación injusta de la libertad, causada a la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, es una violación a sus derechos fundamentales, ya que han truncado las esperanzas y expectativas de una joven, pilar de su hogar, quien era el que llevaba el sustento para su casa, su mamá y su hija; sufrimiento que también han llevado en hombros sus familiares, **por lo que al existir circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral, resulta plenamente aplicable la regla de excepción contemplada en la providencia en cita.**

Debe tenerse en cuenta que en la sentencia de unificación se establece una indemnización de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la víctima y cada uno de sus parientes dentro del primer grado de consanguinidad cuando la privación injusta de la libertad **se configura por un lapso superior a 18 meses**, pero en este caso en el que se presentó una GRAVÍSIMA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS QUE DEBE SER ENÉRGICAMENTE REPUDIADA



POR LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, como lo es el hecho de haber privado de su libertad a un joven con expectativas de vida; el actuar de la Fiscalía que solicitó la imposición de medida de aseguramiento, así como el Juez de Control de Garantías que avaló toda la patraña orquestada por la Fiscalía, debe accederse a otorgar una indemnización en favor de mi prohijado, como lo es la suma de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la víctima directa y su núcleo familiar, dando aplicación a la regla de excepción contenida en la sentencia de unificación en referencia.

Regla de excepción que debe ser aplicada para todo el grupo familiar aquí relacionado, pues es claro que la situación a la que fueron expuestos por el actuar omisivo de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, que causó en la humanidad de los accionantes un daño moral inmenso que resulta imposible de resarcir, pues como claramente se demostrará con el material probatorio, se trata de una familia demasiado unida, humilde, que ha padecido circunstancias de una mayor intensidad y gravedad derivadas de la privación injusta de la libertad de la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, por lo que procede superar las sumas establecidas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014.

Es relevante en este acápite hacer mención al sufrimiento causado a la madre de mi representada, la cual es una persona de edad, que sólo tiene como apoyo a su hija, por el cual da su vida, y tener que pasar por todos estos problemas a raíz de una mala investigación ha sido muy tormentoso para su vida emocional, sentimental; además de ser tachada por los vecinos de tener una hija delincuente traficante de estupefacientes, sin serlo.

Para la hija menor de mi representada, la vida dio un giro total, pues tuvo que dejar de ver a su mamá, pasar una navidad sin ella, tener que ser la burla de sus compañeros de estudio por tener la mamá privada de la libertad, su significado de familia se vio quebrantada con tan pocos años de vida.

En cuanto a la hermana de JOHANNA la situación no fue diferente pues no encontraba la explicación a lo sucedido, ya que siempre ha sido una buena hija, buena hermana, buena mamá. Tuvo que tratar de suplir la ausencia de su hermana apoyando a su madre, aunado al dolor de tenerla que ver recluida en una cárcel por algo que no cometió.

Para sus sobrinas menores, también todo fue muy confuso pues no entendían lo que sucedía con su tía, tuvieron que ver como su prima sufría por tener a su mamá privada de la libertad, ser burla de los compañeros; ver a su mamá triste porque su hermana ya no se encontraba en casa, ser todas mujeres sin tener un padre que las apoyara agravó la situación de todos.

Ni todo el oro del mundo le puede devolver la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES el tiempo que estuvo privada de la libertad, y tratando de demostrar su inocencia, ni mucho menos a su grupo familiar, su mamá, su hermana su hija y sobrinas, no hay dinero que compense el daño al que fue expuesto por parte del Estado, y que ahora éste le debe indemnizar a través de la sentencia condenatoria correspondiente, en la que se debe hacer especial énfasis en la falla administrativa en que incurrió, primero al privar de la libertad a esta individuo, pero la que constituye la peor FALENCIA, en permanecer en dicho error durante estos meses, cuando los elementos materiales de prueba eran lo suficientemente indicativos de que se estaba cometiendo una injusticia con este ciudadano.

❖ **DAÑO INMATERIAL POR AFECTACIÓN RELEVANTE A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS.**

Aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce –sin discriminación alguna– la primacía de los derechos inalienables de la persona (**artículo 5 C.P.**) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad como ámbito de autodeterminación de los individuos (**artículo 2 C.P.**), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia “*in dubio pro reo*” (**artículo 29 eiusdem**).

Con la trágica situación a la que fue expuesta la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, por cuenta de las instituciones DEMANDADAS estamos ante la clara violación de derechos de rango constitucional como son:

- **El derecho fundamental a la igualdad** (Art. 12 de la C.P.).
- **El derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y al buen nombre.** (Art. 15 de la C.P.).
- **El derecho fundamental a la honra.** (Art. 21 de la C.P.)
- **El derecho fundamental a la paz** (Art. 22 de la C.P.).
- **El derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.** (Art. 24 de la C.P.).
- **El derecho a la libertad**, al respecto resulta pertinente citar textualmente lo plasmado en nuestra Carta Política, así:  
  
***“ARTICULO 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.***
- La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.*
- En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.”*
- **El derecho al debido proceso.** (Art. 29 de la C.P.)

Escenario que causa el respectivo perjuicio que evidentemente debe ser reparado.

Medidas de justicia restaurativa que se encuentran plenamente fundamentadas en la mencionada sentencia de unificación de Sala Plena del 28 de agosto de 2014 en la cual se sostuvo que esta clase de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados deben ser reconocidos como una **tercera categoría de daños inmateriales autónomos**. En esa oportunidad se precisó:

*“El daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las siguientes características: i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial. // ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales. // iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de*



otros tradicionalmente Reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular. // iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.

La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos:

i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial. // ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia. // iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas "de crianza", en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. // iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado. // v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional. // vi) Es un daño frente al cual se confirme el rol del juez de responsabilidad extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas;



*sin embargo, en tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas.*

*En aras de evitar una doble reparación, el juez deberá verificar ex ante: (a) que se trate de una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho constitucional o convencional; (b) que sea antijurídica; (c) que en caso de ordenarse una indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios materiales e inmateriales ya reconocidos, y (d) que las medidas de reparación sean correlativas oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado*  
(Resaltado fuera de texto)

En consecuencia, de lo expuesto hasta el momento queda en evidencia la clara vulneración de los derechos de rango constitucional, y como existe la obligación de indemnizar los mismos de manera separada al constituirse en una nueva categoría de perjuicios, aclarando que tal como lo señaló el H. Consejo de Estado en reciente sentencia de 5 DE MARZO DE 2015, SECCIÓN TERCERA, RAD:05001233100020040361701 (37310 Consejero Ponente Ramiro Pazos), “**los 100 SMLMV NO SON SOLO PARA LA VÍCTIMA DIRECTA SINO PARA SU NÚCLEO FAMILIAR**”.

❖ **POR DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, ALTERACIÓN GRAVE A LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA.**

Para el análisis de este perjuicio corresponde hacer una valoración de cómo las personas que reclaman el mismo, efectivamente han visto afectadas sus vidas y la forma común y corriente en que éstas eran desarrolladas y como la relación con el entorno y personas, han cambiado debido al daño causado por la parte demandada.

Debe hacerse especial hincapié en la situación particular que se presenta en tratándose de personas acusadas de un delito tan grave como lo es el TRÁFICO, FABRICACIÓN, PORTE DE ESTUPEFACIENTES, del que se le acusó a la señora SANTACRUZ TORRES. Después de la privación injusta de la libertad, es imposible recuperar el tiempo que perdió en la cárcel, fueron **498 días, ESTO ES 16**

**MESES 13 DÍAS** en los que se perdió de momentos muy importantes junto a sus seres queridos por estar injustamente donde no debía, este daño no solo se ve

reflejado en tiempo sino también en todos los aspectos de los cuales está integrado el ser humano, como por ejemplo el daño que éste generó en su personalidad, autoestima, en su forma de interactuar con los vecinos, el no saber cómo explicarle a su hija por los meses de ausencia y más por un delito que no cometió, debiendo ser sometido al escarnio público, tildándola de delincuente.

La señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, perdió varios de sus derechos como ciudadana colombiana como lo es el de tener un trabajo digno, la privación del voto, además manifiesta que sus condiciones de salud no fueron las mejores, su vida dio un giro de 180 grados, estos meses de privación de la libertad causaron un mayor grado de intranquilidad, máxime cuando él tenía la certeza de que era inocente.

Para su madre y su hija, el calvario no fue muy alejado del sufrido por mi representada, pues aunado al dolor de ver a su familiar en la cárcel, se sumaba el tener que incurrir en gastos para ir a visitarla pues mi representada fue recluida en una cárcel lejos de su hogar, para ayudarla a llevar una mejor vida en la cárcel; el tener que pasar necesidades, hambre, y sin tener un apoyo de la que llevaba las riendas del hogar, de quien hacía hasta lo imposible trabajando en oficios varios.

#### ❖ **POR LESIÓN A LA HONRA, EL HONOR Y EL BUEN NOMBRE**

El Consejo de Estado ha aceptado la procedencia de perjuicios por lesión a la honra, el honor, la libertad y el buen nombre en casos de sindicación y/o detención ilegal a una persona por supuestos nexos con diversos delitos (tráfico) haciendo pública esa relación y ocasionando daño moral y daño a la reputación familiar, estabilidad familiar, tranquilidad y vida. Igualmente, también se ha reconocido la procedencia de los anteriores perjuicios, junto con aquellos originados por violación a la dignidad, vida e intimidad familiar en un caso en el cual se privó injustamente de la libertad a un padre por haber sido acusado y privado de su libertad injustamente por la supuesta violación y muerte de su hija menor.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> RUEDA PRADA, Diana, LA INDEMNIZACIÓN DE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Grupo Editorial IBÁÑEZ, enero de 2016, p 214.

En relación con la indemnización de estos bienes, inicialmente hay que tener en cuenta la distinción que la jurisprudencia ha delineado entre dichos conceptos. Así, la Corte Constitucional ha señalado que:

*“El buen nombre ha sido entendido por la jurisprudencia y por la doctrina como la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas. Este derecho de la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social”.  
(...)*

*“La honra es] la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan. (...) Al referirse al núcleo del derecho a la honra, la Corte en Sentencia señaló que del mismo hace parte tanto, la estimación que cada individuo hace de sí mismo, como, desde una perspectiva externa, el reconocimiento que los demás hacen de la dignidad de cada persona, y expresó que para que pueda tenerse como afectado el derecho a la honra, esos dos factores debe apreciarse de manera conjunta.”<sup>12</sup> (Subrayado ajeno al original).*

Igualmente,

*“El honor se refiere a la conciencia del propio valor, independiente de la opinión ajena; en cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno -el sentimiento interno del honor-, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros -honra”<sup>13</sup> (Subrayado ajeno al original).*

Al romper, puede apreciarse la exhortación que se hace por parte del Tribunal Constitucional para que las autoridades de la República, incluidos por supuesto los jueces, brinden garantías materiales frente al valor fundamental de la honra y el buen nombre y propicien los mecanismos de protección, y, cómo no, los de justa retribución cuando han sido conculcados, labor que le compete al derecho de daños.<sup>14</sup>

En relación con la honra y el buen nombre, señala CESAR SAAVEDRA MADRID, que la reparación de aquéllos encuentra sustento en el artículo 15 C.P. y en el *ius imaginis*, que no se refiere exclusivamente a la integridad física, sino que se hace extensivo a la integridad moral de la persona<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-489 de 2002, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.

<sup>13</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-063 de 1994, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.

<sup>14</sup> PINZÓN MUÑOZ, Carlos Enrique, *El derecho de daños en la responsabilidad Extracontractual del Estado*. P. 222.

<sup>15</sup> SAAVEDRA MADRID, Cesar Augusto, Ob Cit. P. 133. Sobre un estudio histórico y psicológico del honor y la imagen, ver páginas 135-141.

Aunque el reconocimiento de este daño en la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es un aspecto novedoso en la jurisprudencia del Consejo de Estado, ya que, en otras oportunidades la Sección Tercera se había referido a la **lesión al derecho a la honra como fundamento para una indemnización autónoma**, pero por la vía del daño a la vida de relación e igualmente por vía del daño moral, lo que sí resulta novedoso y que por lo tanto solicito se acate en el caso particular y concreto que este perjuicio se reconozca como **AUTÓNOMO**, independiente del daño moral y de la alteración a las condiciones de existencia, como en efecto lo hizo el H. Consejo de Estado en sentencia del 29 de enero de 2014<sup>16</sup>, en la que se decidió acerca de la privación injusta de la libertad de los implicados con el asesinato del ex candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento,

En la providencia mencionada, el Consejo de Estado reconoce a tres personas (Alfredo, Héctor y Norberto) acusadas y privadas de la libertad por 42 meses por haber asesinado supuestamente al ex candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, su escolta y un concejal, lo siguiente<sup>17</sup>:

✓ “Los perjuicios morales de Alfredo por no haber sido incluido en el acuerdo conciliatorio. Para ello analiza la vulneración a la libertad, la honra y el buen nombre dentro del capítulo de los perjuicios morales; posteriormente se refiere a la facultad de superar el tope de los 100 SMMLV y, finalmente, señala:

**“... comportó una grave afectación de sus derechos a la dignidad, al buen nombre y a su honra, circunstancias que permiten inferir, para el caso concreto, una mayor afectación moral.**

Con fundamento en todo lo anterior y teniendo en cuenta que en el presente asunto **se configuraron dos daños antijurídicos independientes, a saber: i) privación injusta de la libertad y; ii) falsas imputaciones difundidas masivamente, la Sala decretará una indemnización por cada uno de tales hechos dañosos**”. (Resaltado ajeno al original).

En otras palabras, si bien se afirma que se reconocerán los perjuicios morales a Alfredo, por no haber sido incluido en el acuerdo conciliatorio, finalmente **se le reconocen dos daños antijurídicos “independientes” que se liquidan por aparte, otorgándole así 300 SMMLV por “privación injusta de la libertad” a Alfredo, monto que no les fue reconocido en cambio a las otras dos víctimas y 200 SMMLV por**

<sup>16</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 29 de enero de 2014, Exp.: 33.806, C.P. Hernán Andrade Rincón.

<sup>17</sup> En el presente caso hay que tener en cuenta que Héctor y Norberto habían realizado un acuerdo conciliatorio con la Fiscalía General de la Nación, a partir del cual se reconocieron 60 SMMLV a cada uno por concepto de perjuicios morales. En consecuencia, el Consejo de Estado respeta lo conciliado y, en relación con los perjuicio



**afectación al buen nombre.**

- ✓ Se reconocen **200 SMMLV a cada una de las víctimas por afectación al buen nombre.** Recuérdese que en el acuerdo conciliatorio se habían reconocido ya 60 SMMLV a Héctor y Norberto.

- Se reconocen **200 SMMLV a cada una de las víctimas por “alteración grave a las condiciones de existencia”.**

En conclusión, analizando sólo los perjuicios extrapatrimoniales, Norberto y Héctor recibieron **(i) 60 SMMLV por perjuicios morales, (ii) 200 SMMLV por falsas imputaciones y (iii) 200 SMMLV por alteración grave a las condiciones de existencia.** Por su parte, Alfredo recibió **(i) 300 SMMLV por privación injusta de la libertad, (ii) 200 SMMLV por falsas imputaciones y (iii) 200 SMMLV por alteración grave a las condiciones de existencia.**

❖ **POR LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD**

Como se ha podido analizar, a partir de la privación injusta de la libertad, pueden surgir diferentes daños dependiendo de la esfera extrapatrimonial que se perjudique: familia, honor y buen nombre, intimidad, dignidad, tranquilidad, etc. Sobre la indemnización de estos últimos años se han analizado los criterios al interior del Consejo de Estado, por lo que **se considera que la libertad, como bien constitucional y convencionalmente protegido, es susceptible de indemnización autónoma.**

Como se indicó en precedencia, el H. Consejo de Estado protegió la libertad por separado en el caso de la privación injusta de la libertad por el asesinato de Luis Carlos Galán, su escolta y un concejal. **ENRIQUE GIL BOTERO señala que la indemnización por afectación a la libertad debe ser resarcida de manera autónoma e independiente<sup>18</sup>.**

Sobre lo anterior, es claro que, en un contexto de simple lógica, no habría razón alguna evidente para rechazar la indemnización por afectación a la libertad de manera independiente.

<sup>18</sup> Gil Botero, Enrique. *La constitucionalización del derecho de daños*, P.80.

**Así como sucede en el derecho a la salud, que es reconocido individualmente y su afectación es protegida mediante una indemnización independiente de los demás rubros, de igual manera tendría que poderse aplicar para el derecho a la libertad. La indemnización autónoma e independiente de los bienes y derechos constitucionales planteada por el H. Consejo de Estado, permite darle claridad y orden al tema.**

Por último, vale la pena resaltar que la indemnización es una forma de reparar el daño que resulta procedente cuando no es posible la reparación in natura o restablecimiento del daño - como se explicó al principio-, de manera que no se entiende por qué deben “privilegiarse” las medidas reparatorias no indemnizatorias, por encima de la indemnización siendo que lo más probable es que, al momento de proferirse la sentencia hayan pasado muchos años, tornando inocua muchas de dichas medidas. Con lo anterior no quiere restarse valor a dichas medidas; todo lo contrario, ellas serán necesarias precisamente en muchos casos en los cuales el daño antijurídico tenga una intensidad mayor y/o pueda ser reparado de manera oportuna mediante la adopción de dichas medidas.<sup>19</sup>

Sin embargo, la crítica está dirigida a que no se tenga la indemnización como una medida reparatoria excepcional, pues ello podría llevar a su inaplicación frente a esa tercera categoría de perjuicios extrapatrimoniales.<sup>20</sup>

#### ❖ **POR DAÑOS A LA SALUD**

Se solicita este perjuicio en razón a las graves afectaciones psicológicas de las que fue objeto con ocasión de la privación injusta de la libertad, lo anterior en consideración al daño que se generó en su esfera intrínseca de salud mental, pues es innegable la situación carcelaria en el país, comenzando por la angustia que como hija le causaba el pensar que podría estar pensando su madre de ella, y su grupo familiar, el saber que ella ayudaba con el sustento del hogar y no poder hacerlo más por estar privada de la libertad le causaba mucha tristeza, el dejar a su hija sola en pleno crecimiento, aspectos que crean un perjuicio psicológico en el ser humano que debe ser resarcido de forma independiente y autónoma, como claramente lo ha precisado el H. Consejo

<sup>19</sup> RUEDA PRADA, Diana, LA INDEMNIZACIÓN DE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Grupo Editorial IBAÑEZ, enero de 2016, p 226.

<sup>20</sup> Ibidem.

de Estado en la plurimencionada sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014.

## **PERJUICIOS MATERIALES**

Se encuentra debidamente probado en el dossier que la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, trabajaba en oficios varios, sin embargo, no hay manera de determinar el monto de sus ingresos.

No obstante, en aplicación de la jurisprudencia del H. Consejo de Estado se presume que el ejercicio de la actividad de vendedor de bolsas y reciclador le reportaba, al menos, un salario mínimo mensual legal vigente.

Así lo ha dicho el órgano de cierre de la Jurisdicción Contenciosa:

*“Conviene destacar que, si bien dentro del asunto de la referencia no se logró acreditar que el señor Caicedo Hurtado desempeñara al momento de su detención actividad productiva alguna, toda vez que dentro del acervo probatorio solo obra un informe de la Personería de Samaniego en el cual se indica que la víctima se dedicaba a vender calzado y cigarrillos, lo cierto es que una de las funciones de la pena (artículo 4° de*

*la Ley 599 de 2000<sup>21</sup>) es la resocialización del individuo<sup>22</sup>, lo cual implica la reincorporación del individuo a la sociedad económicamente productiva, cuestión que resulta compatible con el principio constitucional de la buena fe, principio fundamental previsto en el artículo 83 de la Constitución Política<sup>23</sup>.*

*“En consecuencia y teniendo en cuenta que el señor Caicedo Hurtado para la fecha en que hubiere quedado en libertad tendría 26 años de edad, la Sala **aplicará la presunción respecto de que toda persona que se encuentre en determinada edad productiva devenga por lo menos el salario mínimo legal vigente.***

*“Proceder en forma contraria en el presente asunto entrañaría el desconocimiento de los valores, principios y fines que tanto la Constitución Política como las normas penales consagran respecto de la reinserción social del individuo y el principio de buena fe”<sup>24</sup> (Se destaca).*

<sup>21</sup> Artículo 4 de la Ley 599 de 2000: Funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión.

<sup>22</sup> Corte Constitucional. Sentencia C – 1112 de 24 de agosto de 2000: “La pena tiene en nuestro ordenamiento jurídico un fin preventivo, que se cumple en el momento en que el órgano legislativo establece la sanción que se presenta como la amenaza de un mal ante la violación de las prohibiciones-; un fin retributivo, que se manifiesta al momento de la imposición judicial de la pena, y un fin resocializador que orienta la ejecución de la misma, de conformidad con los principios humanísticos y las normas de derecho internacional adoptadas. Privar al contraventor de la posibilidad de acumular las rebajas de pena que como se señaló, por lo general guardan relación con el desarrollo de actividades edificantes para el interno como el trabajo o el estudio - se traduce en una forma de limitar sus posibilidades de pronta reinserción a la sociedad, coartando tanto el desarrollo de su personalidad que también en estos casos se reconoce plenamente al individuo- como las posibilidades de que el sistema judicial y penitenciario se convierta en verdadera herramienta de control y transformación social”.

<sup>23</sup> Artículo 83 de la Constitución Política de 1991: Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten.

<sup>24</sup> Sentencia de 11 de abril de 2012 expediente No. 23.901 y sentencia de 23 de mayo de 2012 expediente No. 24.861.

Así las cosas, el lucro cesante a favor de la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, se solicita sea liquidado con base en el período de tiempo que estuvo privada de la libertad, más el lapso que la persona requiere para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral. Sobre el tema ha sostenido el H. Consejo de Estado:

*“En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (**8.75 meses**)<sup>25</sup>”<sup>26</sup>* (Negrilla fuera de texto).

En estos términos, procede a calcularse el monto de la indemnización:

Período de privación de la libertad: 16.43 meses.

Período a indemnizar: 16.43+ 8.75 = **25.18 meses**.

Se tomará como el ingreso base de liquidación el salario mínimo vigente actualmente (\$737.717), en tanto resulta más favorable que actualizar el que regía en la época de los hechos. Adicionalmente, al mismo se agregará un 25% por concepto de prestaciones sociales, lo cual arroja la suma de **\$ 922.146,25**.

Se hace necesario aplicar la fórmula para el cálculo del lucro cesante consolidado:

$$S = Ra \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante consolidado para la señora la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES: **\$ 922.146,25**.

i= Interés puro o técnico: 0,004867

n= Número de meses que comprende el período de la indemnización 25.18 meses

Reemplazando tenemos:

$$S = \$ 922.146,25 \frac{(1+0,004867)^{25.18} - 1}{0,004867}$$

<sup>25</sup> “Cfr. URIBE G., José Ignacio y GÓMEZ R., Lina Maritza, «Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003», en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, N° 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22”.

<sup>26</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente No. 13.168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.



0,004867

**S = \$ 24.638.750**

Para efectos de esta demanda se estima como lucro cesante la suma de \$  
**24.638.750**

### **MEDIO DE CONTROL**

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, en contra de: **LA NACIÓN – FISCALÍA  
GENERAL DE LA NACIÓN Y NACIÓN – RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO,  
MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL.**

### **PRUEBAS**

#### **PRUEBAS QUE SE APORTAN:**

##### **DOCUMENTALES**

- Registros civiles de:
  - ✓ **JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES**
  - ✓ **GERALDIN MUÑOZ SANTACRUZ**
  - ✓ **MARY LUZ HERNANDEZ TORRES**
  - ✓ **VALERY OCAMPO HERNANDEZ**
  - ✓ **SARA SOFIA HERNANDEZ OCAMPO**
  - ✓ **FRANCIA LISNEY GONZÁLEZ CASTILLO (PRUEBA 1)**
- Acta de audiencia de legalización de captura y otras. (PRUEBA 2)
- CD audiencia de sentido de fallo. (PRUEBA 3)
- Audiencia de sentencia ABSOLUTORIA (PRUEBA 4)
- Certificado de libertad. (PRUEBA 5)
- Copia íntegra del expediente del INPEC de la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES. (PRUEBA 6)
- Copia íntegra del expediente penal adelantado en contra de la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES. (PRUEBA 7)

Frente a los audios y/o videos de las audiencias penales celebradas en contra de JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, es pertinente precisar que, se aportan,

tomando en consideración la siguiente pauta doctrinal, contenida en el texto *“La prueba de la responsabilidad extracontractual del estado”*, del tratadista Pinzón Muñoz Carlos Enrique, Edición publicada en junio de 2015,<sup>27</sup> que a la letra indica:

*“Con la expedición de ley 906 de 2004 (código de procedimiento penal) solo pueden servir de prueba los documentos que contienen la información presentada y sustentada en AUDIENCIA, de lo que se deriva sin ninguna excepción, que los emanados de la carpeta, son un simple referente de la actuación, es decir, no son técnicamente prueba de las actuaciones surtidas en este tipo de procesos.*

*En efecto, la dirección que usualmente otorgan las partes a las controversias de este tipo es equivocada, en la medida en que se continua solicitando la copia de los documentos escritos que reposan en las carpetas penales o allegándolos en forma de anexos, **sin percatarse que dada la oralidad que se incorporó con la expedición de la ley 906 de 2004 al procedimiento penal, la prueba de la detención y de la privación injusta de la libertad reposa en los registros magnéticos de las audiencias preliminares y ordinarias surtidas dentro de ese tipo de causas.***

*“Artículo 297. Para la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez de control de garantías con las formalidades legales”  
(...)*

*Capturada la persona será puesta a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido.*

*En ese mismo sentido, la formulación de la imputación, según la disposición contenida en el artículo 286 del mismo estatuto, se surte en **“audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías”***

*Y para rematar, la medida de aseguramiento se solicita ante un **“juez de control garantías”**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 306 de la ley 906 de 2004, quien en ultimas, de cumplirse con los requisitos consagrados por esa misma sistemática (artículo 308 ejusdem), es quien dispone de su procedencia dentro de una decisión **motivada que se dicta en audiencia.***

*Entratándose de la acreditación de la **detención** de una persona, y con más veras si se alega que es **injusta**, la acreditación del hecho mismo de la privación de la libertad, el que dentro del nuevo sistema penal acusatorio, solo se detecta a través **de las audiencias surtidas ante el juez de control de garantías, y ulteriormente por el juez de conocimiento, quien se encarga de las audiencias de preparatoria y de juicio oral**, así como las que determinen la suerte del proceso penal, como, verbigracias, la preclusión de la investigación.*

*No puede seguirse considerando que la copia autentica del proceso penal, es prueba idónea de la restricción de la libertad de una persona, pues al tenor de lo dispuesto dentro de esa sistemática, puntualmente en el artículo 146 de la ley 906 de 2004, que define el **registro de la actuación**, está **prohibida** cualquier*

<sup>27</sup> Páginas 168-170

reproducción escrita del proceso penal, ya que para ellos se ha dispuesto de los medios idóneos de registro y reproducción, los que dada la oralidad en que se basa el sistema, no son más que los medios magnéticos que contienen el desarrollo de cada audiencia procesal, eso sí garantizando su originalidad y autenticidad.

Precisamente por ello el artículo 163 de la misma ley dispone que, **“En desarrollo de los principios de oralidad y celeridad las providencias judiciales en ningún caso se podrán transcribir, reproducir o verter a texto escrito apartes de la actuación, excepto las citas o referencias apropiadas para la debida fundamentación de la decisión.”**

De cara a lo anterior, necesariamente debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 165 de la ley 906 de 2004. **“Las providencias judiciales solo serán reproducidas a efectos del trámite de los recursos. Podrán expedirse certificaciones por parte de la secretaría correspondiente donde conste un resumen de lo decidido, previa petición de quien acredite un interés para ello.**

En suma, es una verdad incuestionable la que determina que, en el proceso penal adelantado bajo el ritmo de la ley 906 de 2004, **LA PRUEBA DE LAS DECISIONES QUE SE ADOPTAN ORALMENTE, SON LOS REGISTROS FIDEDIGNOS Y AUTÉNTICOS, NO LAS ACTAS QUE SE EXTIENDEN AL FINAL DE LA ACTUACIÓN COMO UN RESUMEN DE LO OCURRIDO.”**  
(Resaltado fuera del texto original).

## PRUEBAS QUE SE SOLICITAN

### DOCUMENTALES

Que la entidad demandada NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL aporte al proceso la siguiente información:

1. Si por estos hechos la oficina de control interno disciplinario del Departamento de Policía del Valle del Cauca, abrió investigación disciplinaria contra los Agentes de la Policía que realizaron el allanamiento al inmueble ubicado en el pasaje 18 No. 20-10 Barrio Rojas de la ciudad de Tuluá (Valle), IT SALAZAR GALLEGU ANDRÉS, PT JHON JAIRO DELGADO BURBANO, PT JAWER CHACÓN CAICEDO, PT JEFERSON MUÑOZ ROSERO, PT JEISON CHACÓN CARRILLO y PT JHON ALEJANDRO ROMERO VELÁSQUEZ, por los hechos ocurridos el día 06 de noviembre del 2013, en el que se vio involucrado mi poderdante la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ, o en contra de otros miembros de la institución

y en caso positivo por favor informar el estado actual en que se encuentra, con su respectivo radicado.

2. Se informe qué medidas de investigación se adelantaron por parte de los superiores de los Agentes de la Policía que realizaron el allanamiento al inmueble ubicado en el pasaje 18 No. 20-10 Barrio Rojas de la ciudad de Tuluá (Valle), IT SALAZAR GALLEGU ANDRÉS, PT JHON JAIRO DELGADO BURBANO, PT JAWER CHACÓN CAICEDO, PT JEFERSON MUÑOZ ROSERO, PT JEISON CHACÓN CARRILLO y PT JHON ALEJANDRO ROMERO VELÁSQUEZ, por los hechos ocurridos el día 06 de noviembre del 2013, en caso negativo se exponga las razones de la omisión.

3. En caso de no estar en curso investigación disciplinaria por los hechos del 06 de noviembre del 2013, solicito que se oficie a la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento de Policía del Valle del Cauca, para que inicie la respectiva investigación, teniendo en cuenta los hechos planteados al inicio de este escrito.

3. En caso de existir proceso disciplinario se expida copia del mismo.

4. Copia del oficio de remisión a la oficina de control interno y disciplinario del Departamento de Policía Nacional.

### TESTIMONIALES

Respetuosamente se solicita se decrete como prueba el testimonio de los señores:

- JHOANA ESCOBAR PRIETO, identificada con la cedula de Ciudadanía No. 29.314.340. Celular 3206910289.
- ALEXANDRA NEBULA, identificada con la cedula de Ciudadanía No. 41.119.480. Celular 3174246332.
- ARLEDINSON MOSQUERA CÓRDOBA, identificado con la cedula de Ciudadanía No. 14.800.594. Celular 3183448356.



Para que rindan declaración en audiencia, de todo aquello que les conste frente a la situación de la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES y den respuesta a las preguntas que se formularan en su momento frente a los siguientes temas:

- a. Indicarán si conocieron a la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES y desde cuanto tiempo atrás.
- b. Cómo estaba conformada su familia para el momento de su privación injusta de la libertad y en la actualidad.
- c. Dónde y con quien vivía la señora JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES, para el momento de su privación y en la actualidad.
- d. Cómo eran las relaciones con su madre, hija, hermana, sobrinas y después de su privación injusta de la libertad.
- e. Qué efecto produjo en su grupo familiar esta privación.
- f. Indicarán que originó en sus familiares y en la propia víctima su privación de la libertad.
- g. Se les interrogará por todos los daños y perjuicios por los cuales se solicita indemnización (daño a la salud, daño a la honra y al buen nombre, a la vida de relación, etc.)
- h. Todo lo demás que estimen pertinente el señor juez conductor del proceso, este togado y las partes intervinientes.

Las citaciones para la comparecencia de todas y cada una de las personas mencionadas serán entregadas en el lugar de domicilio de éstos por el suscrito apoderado judicial.

### **ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA**

Se estima la cuantía en **\$24.638.750**, como pretensión por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, sin que se limite la misma, tal como lo expone el art. 157 de la Ley 1437 de 2011.

### **JURAMENTO ESTIMATORIO**

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 206 del Código General de Proceso (Ley 1564 de 2012), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entenderá

realizado solemnemente con la presentación de este escrito, que el monto de la suma por perjuicios materiales reclamados por los demandantes asciende a la suma de **\$24.638.750**.

## CADUCIDAD

Respecto a la caducidad de la acción de reparación directa en tratándose de casos de privación injusta de la libertad, la posición del Honorable Consejo de Estado ha sido clara y reiterativa al determinar que, ésta se cuenta a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en quede en libertad el procesado, **LO ÚLTIMO QUE OCURRA**<sup>28</sup>. Momento en el cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.

En el presente caso la privación injusta de la libertad de la que fue objeto la señora **JOHANNA LORENA SANTACRUZ TORRES**, se presentó desde el día 07 de noviembre de 2013 hasta el **20 de marzo de 2015**; teniendo en cuenta que la libertad de la procesada se materializó el día 20 de marzo de 2015, pero la sentencia absolutoria quedó ejecutoriada el **20 de mayo de 2015** tal y como consta en el expediente penal (PRUEBA 7 – EXPEDIENTE PENAL - Folio 183), los 2 años de caducidad para ejercer la acción de reparación directa fenecerían el **21 de mayo de 2017**, dado que la ejecutoria de la sentencia absolutoria fue lo último que ocurrió. Teniendo en cuenta que la solicitud de conciliación fue radicada el día **17 de marzo de 2017**, el termino de caducidad se suspendió conforme a lo manifestado por el artículo 21 de la ley 640 de 2001, hasta el momento de expedición de la constancia de no conciliación, **estando en término para presentar la respectiva demanda.**

## COMPETENCIA

<sup>28</sup> Sentencia del 8 de febrero de 2017 M.P. Hernán Andrade Rincón (Exp.41204), Sentencias del 25 de enero de 2017 M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera (Exp.44214-42665-43699), Sentencias del 8 de noviembre de 2016 M.P. Marta Nubia Velásquez Rico (EXP.44955-44087-44524-38144), Sentencia del 7 de diciembre de 2016 M.P. Marta Nubia Velásquez Rico (Exp.44751) Sentencia del 11 de agosto de 2011 M.P. Hernán Andrade Rincón (Exp.21801).

En los términos del artículo 156 numeral 6 de la Ley 1437 de 2011, como elección del accionante solicito se tenga el lugar donde se produjeron los hechos, es decir el Municipio de Tuluá Valle, así mismo que la cuantía no excede de los 500 SMLMV, por lo que corresponde al señor al señor Juez Administrativo de Buga Valle (REPARTO) conocer del presente asunto.

## NOTIFICACIONES

Las entidades DEMANDADAS

LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN: Cl. 10 #5-77 Cali – Valle del Cauca, teléfono: 57(2) 3927900

Email: [juridicanotificacionesutela@fiscalia.gov.co](mailto:juridicanotificacionesutela@fiscalia.gov.co)

NACIÓN – RAMA JUDICIAL: CALLE 72 No. 7-96 de la ciudad de BOGOTÁ D.C. E-mail: [deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co](mailto:deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co)

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL: Oficina de Defensa Judicial Calle 21 #1N-65. PISO 4, Cali, Valle del Cauca, teléfono: (2) 8826106-8981273-8981258

Email: [mecal.distrito1@policia.gov.co](mailto:mecal.distrito1@policia.gov.co)

Los DEMANDANTES y el suscrito:

Carrera 14 # 13-31 Sector Invico, (Pereira - Risaralda). Teléfonos: (6) 3159332-3175387888.

**Así mismo, solicito y autorizo de forma expresa que todas las decisiones y citaciones que adopte el Despacho, tal como lo señala el art. 205 de la Ley 1437 de 2011 me sean notificadas al correo electrónico [notificaciones@legalgroup.info](mailto:notificaciones@legalgroup.info)**

## ANEXOS

1. Poderes para actuar (ANEXO 1)
2. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad Legal Group Especialistas en Derecho. (ANEXO 2)
3. Copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al

Ministerio Público en medio magnético CD. (ANEXO 3)

4. Copia de la demanda y sus anexos en medio magnético CD para el archivo del Juzgado. (ANEXO 4)
5. Constancia de notificación de la solicitud de conciliación a la Agencia Jurídica. (ANEXO 5)
6. Constancia de no conciliación (ANEXO 6)

**SE INFORMA AL HONORABLE DESPACHO QUE LA GRAN MAYORÍA DE DOCUMENTOS EN MENCIÓN SE APORTAN EN MEDIOS MAGNÉTICOS COMO SÍMBOLO DE COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE, EVITANDO IMPRESIONES INNECESARIAS, ASÍ COMO EN CABAL ACATAMIENTO DE LA POLÍTICA DE CERO PAPEL QUE SE HA VENIDO IMPLEMENTANDO A NIVEL NACIONAL, LA QUE FUE ADOPTADA CON CARÁCTER OBLIGATORIO POR EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 04 DEL 03 DE ABRIL DE 2012 “EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA CERO PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”**

Atentamente,

---

**JONATHAN VELÁSQUEZ SEPÚLVEDA**  
Representante Legal  
**LEGALGROUP ESPECIALISTAS EN DERECHO S.A.S.**

Atentamente,



---

**JONATHAN VELÁSQUEZ SEPÚLVEDA**  
Representante Legal de **LEGALGROUP ESPECIALISTAS EN DERECHO S.A.S.**